JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Marzo primero (01) de dos mil trece (2013)

Medio de control:	ACCIÓN EJECUTIVA
Demandante:	MONICA YAMILE RIAZA RUIZ Y OTRO
Demandados:	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO
Radicado:	05 001 33 33 012 2013 00127 00

INTERLOCUTORIO No. 051

ASUNTO: DECLARA FALTA DE COMPETENCIA. COMPETENCIA DE LA JUSTICIA ORDINARIA

Las señoras **MONICA YAMILE RIAZA RUIZ** y **PAULA ANDREA RIAZA RUIZ**, actuando a través de apoderado judicial, promovió acción ejecutiva en contra de la **ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO**; con el fin de que se libere mandamiento de pago por las siguientes sumas de dinero contenidas en las facturas que a continuación se relacionan:

FACTURA NO.	ORDEN DE COMPRA	FECHA RECEPCIÓN	NO. RECEPCIÓN DE COMPRA	VALOR
35	2384	30 DE JULIO DE 2011	2384	2154499
54	2394	30 DE AGOSTO DE 2011	2394	10430336
10	2311	14 DE MARZO DE 2011	2311	930000
3	2304	14 DE MARZO DE 2011	2304	5390599
1	2298	28 DE FEBRERO DE 2011	2298	8111000
51	2395	30 DE AGOSTO DE 2011	2395	480000
34	2375	29 DE JULIO DE 2011	2375	149400
27	2333	27 DE ABRIL DE 2011	2333	1795000
26	2334	27 DE ABRIL	2334	9837800

		DE 2011		
20	2332	27 DE ABRIL DE 2011	2332	3628200
TOTAL				42906834

Una vez revisada la presente demanda, el Despacho advierte su falta de competencia para conocer del proceso de la referencia, de conformidad con las razones que se exponen a continuación.

CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 75 de Ley 80 de 1993, la controversias que se originan en los contratos estatales son competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, incluyendo aquellas originadas en los procesos de ejecución y cumplimiento.

Con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se dispuso en su artículo 104 los procesos de los cuales tiene conocimiento la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y dispuso en su numeral 6° que será de conocimiento de la jurisdicción , *“...Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades...”*

Así las cosas, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ya no sólo conocerá de los procesos de ejecución derivados de contratos estatales, como quedó establecido en la Ley 80 de 1993, sino que también, será de su conocimiento, aquellos procesos de ejecución originados en contratos celebrados por entidades públicas.

Como se observa, se trata de una norma especial que atribuye la competencia a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para conocer procesos de ejecución derivados de contratos celebrados por entidades públicas, ya que por regla general, la competencia para conocer de la misma radica en la jurisdicción ordinaria, la cual tiene la cláusula general de competencia.

Descendiendo al caso concreto se observa que la acción ejecutiva interpuesta por las señoras MONICA YAMILE RIAZA RUIZ y PAULA ANDREA RIAZA RUIZ, en contra de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO, tiene como título ejecutivo las facturas números 35, 54, 10, 3, 1, 51, 34, 27, 26 y 20 respaldadas en las ordenes de

compras 2384, 2394, 2311, 2304, 2298, 2395, 2375, 2333, 2334 y 2332 respectivamente, las cuales corresponden a mercancías efectivamente entregadas a la entidad ejecutada.

Sin embargo no se observa de los hechos de la demanda o de los documentos señalados como título ejecutivo, que las facturas relacionadas se deriven de un contrato celebrado por una entidad pública, circunstancia que determina la competencia de esta jurisdicción para conocer del asunto de la referencia.

De lo anterior se desprende que, la obligación que se pretende reclamar por la vía de la acción ejecutiva, no proviene de un contrato o de condena proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez que se reclama el pago de una suma de dinero que se encuentra soportada en unas facturas, de ahí que la competencia para conocer de la acción ejecutiva radique en la jurisdicción ordinaria.

Concluyéndose, que la naturaleza misma del título ejecutivo, no surge de un contrato o condena impuesta por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que lo pretendido es el pago de las sumas de dinero contenidas en una obligación legal soportada en una facturas, siendo dicha reclamación plenamente civil.

En un caso similar al que hoy ocupa la atención del Despacho, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura señaló que la competencia para dirimir conflictos como el aquí planteado, es de la Jurisdicción Ordinaria, y al respecto dijo:

*“Para la Sala, estudiadas y analizadas las pretensiones, hechos y pruebas de la demanda sub examine, no cabe duda que en el caso particular, corresponde la misma a una demanda ejecutiva para que la **ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL**, cancele a favor de la **EMPRESA CORTICAL LTDA.**, unas obligaciones dinerarias respaldadas en títulos valores –facturas de venta- correspondientes al suministro de material y elementos de uso ortopédico utilizables para la salud humana de los usuarios del mencionado Hospital.*

(...)

Ahora bien, respecto de la ejecución de títulos valores ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la doctrina, advierte lo siguiente: “los títulos valores, dentro de la contratación estatal, son perfectamente aplicables para respaldar las distintas obligaciones contractuales adquiridas tanto por la Administración, como por los propios contratistas, y siempre y cuando los títulos se deriven de contratos estatales. Si la razón de ser del título valor no proviene directamente del contrato estatal, entonces no habrá razón para que pueda ejecutarse ante la justicia contencioso administrativa.”

De esta forma, en principio, los títulos valores serán ejecutables ante el Juez administrativo cuando tengan su origen en un contrato estatal. Las facturas de venta, según lo previsto en el artículo 772 del Código de Comercio, modificado a su vez por el artículo 1° de la Ley 11231 de 2008, son calificables como verdaderos títulos valores.

(...)

En principio podría pensarse que la controversia es de conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en tanto las facturas que se pretenden ejecutar se derivan de una relación contractual, sin embargo, entrando en el debido análisis del problema jurídico planteado en el conflicto, la Sala observa que si bien los documentos –facturas de venta- aportados con la demanda son la base de la ejecución, lo cierto es que el ejecutante no explica el origen de la obligación ejecutada, ni menos aportó los demás documentos necesarios que deben integrar esa factura de venta, pues tratándose, como se trata, de un título valor en el que interviene una entidad estatal, dicho título es de los denominados complejos, dada su naturaleza de origen y creación. Así, la regla general en materia de ejecución contra entidades estatales, es la presencia de un título ejecutivo complejo, pues como lo anota la doctrina: “Será complejo cuando la obligación y sus elementos esenciales se estructuren con base en varios documentos, como en el caso de los títulos ejecutivos contractuales, dado que por regla general, se conforman con varios documentos (contrato, acto administrativo que aprueba póliza, etc.) en el caso de los contratos estatales, así se trate de títulos ejecutivos, siempre el título ejecutivo será de carácter complejo.”

De modo análogo, debe señalarse que si las facturas de venta, que originan el conflicto de competencias del que ahora se ocupa esta Colegiatura, se dieron por la venta de unos equipos de ortopedia aptos para la salud humana, lo cierto es que en principio no se advierte la integración de un título ejecutivo complejo de carácter contractual, pues no hay prueba del contrato estatal que soporte esa relación y tampoco del registro presupuestal que respalde las obligaciones económicas derivadas del acuerdo, asunto que en todo caso, deberá ser dilucidado por el juez competente, según lo que resuelva en la parte resolutoria de este proveído. Es por lo anterior –la falta de contrato estatal- también, que no puede concluirse que las facturas de venta serían ejecutables ante el juez administrativo, pues no existe la prueba que son causa o resultado de un contrato estatal (...)¹

De acuerdo con lo expuesto, este Despacho carece de jurisdicción y competencia para conocer del asunto, toda vez que no se trata de la ejecución de una obligación derivada de un contrato celebrado por una entidad pública, de una conciliación o un laudo arbitral en el que hubiere sido parte la entidad demandada, ni de una sentencia condenatoria; siendo la jurisdicción ordinaria civil la competente para el conocimiento del mismo, en virtud de la cláusula general de competencia establecida en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, según la cual “Corresponde a la jurisdicción civil todo asunto que no esté atribuido por ley a otras jurisdicciones”.

¹ Consejo Superior de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Radicado 11001010200020120276800. Magistrado Ponente. Dr. HENRY VILLARRAGA OLIVEROS. Asunto: Conflicto Negativo de Jurisdicciones suscitado entre los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Envigado Antioquia y el Dieciséis Administrativo Oral de Medellín.

Así las cosas, de acuerdo con las normas de competencia en razón de la cuantía (artículo 25 Código General del Proceso), el territorio (artículo 23 del Código de Procedimiento Civil) y la competencia funcional (Artículo 14 Código de Procedimiento Civil modificado por la Ley 1395 de 2010), se estima el competente es el Juzgado Promiscuo Municipal de Yolombó -Antioquia.

En este orden de ideas, se declarará la falta de competencia y se ordenará remitir el expediente en el estado en que se encuentra al **Juzgado Promiscuo Municipal de Yolombó –Antioquia**, quien de acuerdo con lo dicho es el competente para conocer de la presente acción.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN**,

RESUELVE

1. Declarar su falta de competencia, para conocer de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho promovida por **MONICA YAMILE RIAZA RUIZ y PAULA ANDREA RIAZA RUIZ**, a través de apoderado judicial contra la **ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ –ANTIOQUIA**, de acuerdo con lo expresado en la motivación precedente.
2. Estimar que el Competente para su conocimiento, es el **JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE YOLOMBÓ –ANTIOQUIA**.
3. De conformidad con el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA se ordena **REMITIR** el expediente por medio de la Secretaría al **JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE YOLOMBÓ – ANTIOQUIA**, previa comunicación a las partes

NOTIFÍQUESE,

La Juez,

MARIA ALEJANDRA RESTREPO ESCOBAR

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

CERTIFICO: En la fecha se notificó por **ESTADO** el auto anterior.

Medellín, **05 de marzo de 2013.** Fijado a las 8 a.m.

KENNY DÍAZ MONTOYA
Secretario

CVG